

0058/2023

El presente proyecto de Real Decreto trae causa inmediata de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, cuyo título III está dedicado al movimiento memorialista, reconociendo la labor de las asociaciones, fundaciones y organizaciones que hayan destacado en la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas de la Guerra y la Dictadura, y que contempla la creación del Consejo de la Memoria Democrática y del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. En concreto, los artículos 57 y 59 del mencionado texto disponen la creación del Consejo de la Memoria Democrática, adscrito al Ministerio competente en materia de memoria democrática, y por su parte, el artículo 59 del mismo cuerpo legal, crea el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática.

En la materia específica a que ha de ceñirse este Informe, esto es, a la materia de protección de datos personales, la actual ley 20/2022 fue objeto de Informe 74/2020 por esta AEPD, y como consecuencia de este (y de las demás aportaciones que se hicieran en el curso del procedimiento normativo) se introdujo en el texto legal la actual Disposición adicional décima, relativa a Protección de datos de carácter personal, cuyo texto, en el apartado 1, es el siguiente:

1. Los tratamientos de datos personales regulados en la presente ley se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los derechos de acceso, rectificación y supresión se ejercitarán conforme a la normativa referida en el párrafo anterior, sin perjuicio de las especificidades que se recojan en su caso en los apartados siguientes.

Esto es, la ley 20/2022 contiene un reconocimiento general a que la normativa de protección de datos se aplica a cualesquiera actividades derivada de la misma, con las especificidades recogidas en el segundo párrafo, y

además las reglas especiales que se recogen en los apartados 2 a 4 de dicha Disposición Adicional, aplicables a los registros de víctimas, al censo de víctimas, a los datos personales relativos al Banco de ADN del art. 23, o a la base de datos del art. 39.3 de la ley, que en principio no son objeto del actual proyecto.

En relación con el proyecto de Real Decreto sometido ahora a informe, su artículo 16.2 contiene una referencia a la normativa de datos personales, en lo relativo a excepcionar de publicidad registral los datos referidos a los datos de /carácter personal que consten en la documentación que presenten las entidades memorialistas que soliciten su registro.

2. La publicidad del Registro no alcanza a los datos referidos a los domicilios de las personas, estado civil y otros datos de carácter personal que consten en la documentación de cada entidad, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y el resto de normativa de protección de datos de carácter personal.

Esta Agencia considera que dicha norma refuerza el principio de minimización de datos previsto en el art. 5.1.c) RGPD, y por tanto opina favorablemente.

En la Disposición final primera se modifica el Real Decreto 1791/2008, sobre la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. En su apartado Tres se modifica el art. 7 de dicho RD, para adaptar, según parece, la denominación de la normativa de procedimiento administrativo (ya que la ley 30/1992 ha sido derogada por la ley 39/2015). Y si bien no parece variar la redacción del apartado a) de dicho art. 7, lo cierto es que se establece -como en la redacción original- y mediante Real Decreto, una facultad omnímoda del instructor del procedimiento (que bien es cierto que se trata de una “Declaración de reparación y reconocimiento personal”, art. 1 del RD 1791/2008) para *solicitar de los órganos, organismos públicos y resto de entidades de derecho público de la Administración General del Estado, así como de cualesquiera otras entidades o instituciones privadas, aquella información que pueda ser necesaria para la resolución del procedimiento*. No puede dejar de recordarse que una norma de este rango no puede contradecir otras de rango superior que impidan proporcionar dicha información (ya sea por ejemplo la propia normativa de protección de datos, o normativa de otro tipo que tenga una regulación legal específica que restrinja dicha difusión de información o datos -fiscal, seguridad social, etc.-, pudiendo incluso, dada la amplitud de la redacción, referirse a terceros). En consecuencia, esta Agencia

opina que debería de recogerse en este apartado una referencia a que dicha posibilidad de petición de información por el instructor habrá de ser siempre que no esté restringida por una norma que lo impida, o redacción similar.